



Bogotá, D.C., tres (03) de octubre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00380-00
ACCIONANTE: UERMAR ANGULO AVILA
ACCIONADAS: RAMA JUDICIAL – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

Procede el Despacho a decidir sobre la admisión de la acción de tutela de la referencia.

Revisado el plenario, se advierte que el accionante **UERMAR ANGULO AVILA** identificado con cédula de ciudadanía 1.022.348.975, interpone la presente acción constitucional en contra del **RAMA JUDICIAL – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, en procura de la protección de los derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna, al trato digno y a la protección de datos.

De la lectura dada al libelo petitorio, se advierte que los hechos narrados por la accionante comprometen al Juzgado 21 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. En efecto, en los hechos siete y ocho de la demanda de tutela, el accionante sostiene lo siguiente:

*“(…)
SIETE: Para el 6 de septiembre solicite al juzgado de ejecución de penas por medio de derecho de petición que me dieran un certificado en el cual ya había cumplido con la pena.*

*OCHO: Derecho de petición que a la fecha nunca fue contestado por parte del juzgado”.
(…)”*

De igual manera, se aporta derecho de petición a folio 12 de la acción de tutela en donde se observa la siguiente solicitud:

*“(…)
Solicito al JUZGADO 021 DE EJECUCION DE PENAS que llevo mi condena a que me den un certificado expedido por ustedes donde conste de manera concreta el día en el que cumplí con mi pena. Esto con el fin de demostrar a los empleadores donde llevo mi hoja de vida que ya cumplí con el tiempo de condena esto para poder acceder a un trabajo digno y así ver por mí y los de mi grupo familiar
(…)”*

Siendo así, es menester precisar que el Decreto 333 del 06 de abril de 2021, “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”, precisa sobre el reparto de las acciones de tutela en contra de jueces y tribunales, lo siguiente:

“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere



*la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(...)*

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”

El Juzgado reconoce que la Corte Constitucional ha precisado que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y demás normas de carácter reglamentario, en modo alguno constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. No obstante, en el Auto 216 de 2019 (MP. Diana Fajardo Rivera) la misma Corporación aclaró que tales consideraciones no impiden que la autoridad judicial que conozca un conflicto de competencia aparente, suscitado con base en reglas de reparto, devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso¹. Este ocurre cuando existe una “*manipulación grosera*”² de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “*distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes*”³; o en aquel “*en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído*”⁴.

En ese orden de ideas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, corresponde conocer de la acción de tutela **al TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ – SALA PENAL**⁵, en tanto esta ciudad coincide con el lugar (a) donde presuntamente se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados, o (b) donde se producen los efectos de tal vulneración o amenaza –factor territorial– y (c) se trata del superior funcional del Juzgado que debe ser vinculado en este trámite constitucional.

¹ Se aclara que los pies de página 1, 2 y 3 corresponden al Auto 216 de 2019, emanado de la Corte Constitucional. “Esta posición fue establecida por la Corte en el auto 124 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa ocasión, esa Corporación consideró que, si bien no es posible promover conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, esto no lleva a desconocer su validez. Por consiguiente, “*deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario*”. Esta postura ha sido reiterada en el auto 198 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), que ha sido tenido en cuenta de manera continua por la Corte en los pronunciamientos subsiguientes y, más recientemente, en los siguientes autos: 365 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 378 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 525 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 588 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; y 293 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

² Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

³ Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁴ Auto 198 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte, incluso, ha llegado a sostener, en el auto 073 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), por ejemplo, que “*no es acertado que una autoridad par o de inferior categoría resuelva el amparo que se presenta contra por ejemplo un alto tribunal*”. Esta providencia se reitera en el auto 372 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).”

⁵ Corte Constitucional - auto de competencia para dirimir conflictos residuales de autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común, N° 075 de 2015, M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, 11 de marzo de 2015, “...De otra parte, para esta Corporación no fue acertada la decisión del Tribunal Superior de Medellín, al desconocer, en primer lugar, la calidad que ostentan los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que tal como lo establece el Acuerdo N° 14 de 1993 del Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 3º: “Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tendrán la misma categoría y remuneración de los jueces de circuito (...)” (Subrayas propias). De lo anterior, se pudo inferir con meridiana claridad, que se trata de un despacho judicial de igual categoría a los juzgados del circuito, por tanto, el encargado de asumir las acciones de tutela que versen en contra de estos, será, en primera instancia, su superior funcional, que no es otro que el Tribunal Superior”.



Por lo anterior, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: ABSTENERSE de conocer la presente acción de tutela por carecer de competencia, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR la presente acción constitucional **al TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ – SALA PENAL** – reparto - a través de la correspondiente oficina de apoyo judicial, conforme a lo expresado en precedencia.

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: Por Secretaría, dejar las constancias respectivas y dar cumplimiento a lo aquí ordenado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Jado

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8153bc6507549c28caad22b539c4ca499cda618a58adb8390e9d6baea84a57ca**

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>